

Sección sobre Chile: Informe sobre la Trata de Personas 2008

Publicado el 4 de junio de 2008 por el Departamento de Estado de los EE.UU.

Texto completo en inglés: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/>

Chile (Nivel 2)

Chile es país de origen, tránsito y destino de trata de hombres, mujeres y niños para explotación comercial sexual.

La mayor parte de las víctimas de la trata sexual son mujeres y niñas de nacionalidad chilena que son traficadas al interior del país.

Ciudadanas chilenas son también víctimas de trata con fines sexuales y explotación laboral hacia países vecinos, tales como Argentina, Perú, y Bolivia, además de Europa, Japón, y los Estados Unidos. Víctimas procedentes de países vecinos y de Asia, tales como la República Popular de China, son llevadas a Chile con falsas ofertas de trabajo y forzadas a ejercer la prostitución. Inmigrantes de Perú y Bolivia, incluyendo menores, son posibles víctimas de esclavitud involuntaria en la agricultura en el norte de Chile. Existen informes de que individuos de nacionalidad China usan a Chile como corredor para ingresar personas a México, Brasil y los Estados Unidos; algunas de ellas podrían ser víctimas de trata de personas.

El gobierno de Chile no cumple totalmente con las normas mínimas para eliminar la trata de personas. Sin embargo, está realizando esfuerzos importantes para hacerlo. El año pasado, el gobierno fortaleció sus esfuerzos para la protección de víctimas e hizo esfuerzos sólidos para la aplicación de la ley y para prevenir crímenes relacionados con la trata de personas. Sin embargo, al mismo tiempo, las autoridades chilenas informaron sobre problemas para obtener suficientes condenas en los tribunales contra los delincuentes en materia de trata de personas.

Recomendaciones para Chile: promulgar legislación que prohíba toda forma de trata de personas, según el Protocolo de Trata de Personas de Naciones Unidas; Aumentar la aplicación de la ley y la capacitación judicial para la implementación de nueva legislación; promover la investigación y el procesamiento de los crímenes de trata de personas.

Procesamiento

Durante el periodo informado, el gobierno de Chile continuó sus esfuerzos de aplicación de la ley contra quienes trafican personas. Chile no prohíbe todas las formas de trata de personas, aunque sí penaliza la trata transnacional con fines de explotación sexual a través del Artículo 367 de su Código Penal. Las penas establecidas por este estatuto fluctúan entre tres y veinte años de cárcel, dependiendo de si existen circunstancias agravantes. Estas condenas son suficientemente rigurosas y son proporcionales a las penas por otros crímenes graves, tales como violación. En la práctica, sin embargo, debido a que las penas de menos de cinco años a menudo son remitidas y a que la pena mínima por violación es de cinco años y un día, las personas condenadas por violación son habitualmente encarceladas mientras que los traficantes de personas no lo son. El marco legal del gobierno no prohíbe específicamente la trata con fines laborales. La Cámara de Diputados aprobó legislación contra la trata de personas en abril de 2007, la que ahora está pendiente en el Senado. Durante el período de este informe, el gobierno comenzó a investigar 138 casos de trata de personas, inició 51 procesamientos, y obtuvo 22 condenas por explotación de comercio sexual de menores y una condena de tres años por trata y explotación sexual a través de fronteras. Esta última fue notable ya que implicó el reclutamiento de mujeres peruanas para ejercer la prostitución forzada a través de una agencia de empleos que la policía logró descubrir mediante una operación encubierta. 95 de los 138 casos que el gobierno se encuentra investigando están relacionados con la prostitución infantil y el gobierno obtuvo seis condenas de entre 300 días a cinco años de cárcel. Al mes de marzo de 2008, sesenta y seis casos permanecían abiertos. El gobierno aumentó la capacitación contra el tráfico de personas para sus funcionarios en todo el país, y también trabajó estrechamente con gobiernos de países vecinos, España, e INTERPOL en casos de trata internacional. No hubo informes de funcionarios de gobierno implicados en la trata de personas durante el período de este informe.

Protección

En el último año, el gobierno de Chile fortaleció sus esfuerzos para ayudar a las víctimas de la trata. El gobierno sistemáticamente identifica a las víctimas de la trata y las refiere a organizaciones no gubernamentales (ONGs) y hogares donde tienen alojamiento, atención médica, ayuda psicológica y apoyo. Las víctimas también disponen de intérpretes y asistencia legal. En octubre de 2007, el gobierno lanzó un programa para ayudar a menores víctimas de todas las formas de abuso, incluyendo a las víctimas de tráfico desde otros países. El gobierno asignó \$ 1.5 millones (de dólares) a ONGs para crear un programa que se estima prestará asistencia a 1.800 víctimas infantiles en 2008. La policía también implementó técnicas de interrogación que son más respetuosas con las víctimas. Por ejemplo, asigna una sala especial para entrevistar a las víctimas de trata, usa ventanas-espejo para que las víctimas puedan identificar a los sospechosos de explotación sin miedo a sufrir represalias, y minimiza el número de entrevistas a las víctimas mediante grabaciones en video. Las autoridades chilenas alientan a las víctimas a ayudar en la investigación y el procesamiento de los traficantes. No hubo informes confirmados de que víctimas hayan sido condenadas o castigadas por haber cometido actos ilegales como resultado directo de haber sido traficadas. Las víctimas de la trata de personas pueden permanecer en Chile durante el proceso judicial contra los que las han traficado. El gobierno trabaja con gobiernos extranjeros y con OIM (Organización Internacional para las Migraciones) para facilitar el retorno seguro de víctimas chilenas que hayan sido llevadas ilegalmente al exterior, así como de víctimas extranjeras de la trata hacia Chile.

Prevención

El gobierno de Chile aumentó sus esfuerzos de prevención durante el período del informe. Realizó extensas campañas de educación y en los medios de comunicación para alertar a jóvenes chilenos que buscan trabajo en el extranjero. Asimismo, continuó trabajando con ONGs y organismos internacionales para desarrollar proyectos para concientizar sobre el problema. El gobierno realizó esfuerzos concretos para reducir la demanda por el comercio sexual a través de la aplicación de ley, apuntando a los clientes de prostitución infantil. En distintos casos, seis hombres fueron condenados por comercio sexual con un menor con sentencias de entre 61 días a seis años de cárcel. Dos de estos casos estaban relacionados con el uso de menores en pornografía. Las tropas chilenas asignadas a misiones de paz en el extranjero asistieron a una capacitación obligatoria sobre la trata de personas, derechos humanos, y cumplimiento de leyes internacionales. El contingente militar chileno en Haití tiene la obligación de cumplir con las normas de conducta impuestas por la policía de Naciones Unidas y el comandante de Fuerzas de Naciones Unidas.